

## 84-D-17

**TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL:** San Salvador, a las once horas con veinte minutos del día diecinueve de marzo de dos mil dieciocho.

El día trece de junio de dos mil diecisiete el señor \*\*\*\*\* presentó una denuncia contra la licenciada Roxana García, servidora pública de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar de la Oficina Fiscal de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con la documentación que adjunta, en la cual manifiesta que:

“(...) Desde el 18/10/16 este servidor presento denuncia formal contra la Sra. \*\*\*\*\* No. de Referencia \*\*\*\*\* , por lo delitos de: Lesiones, Denuncia Calumniosa, Falso Testimonio, Manipulación de menor para rendir falso testimonio y acusación calumniosa; en perjuicio de la adolescente \*\*\*\*\* quien es mi hija.

Sin embargo hasta la fecha de hoy 13 de junio del 2017, no tengo conocimiento ni se me ha notificado de ninguna manera que dicho caso haya sido judicializado; a pesar de contar con todas las evidencias, forenses, periciales, documentales, y testimoniales para hacerlo.

Les menciono que he enviado varios escritos dirigidos al Sr. Jefe de Auditoría Fiscal con copia al Sr. Fiscal General de la Republica y solo hemos obtenido escritos de respuesta que en si son recomendaciones al Sr. Jefe de la Unidad de Protección a la Mujer y al Menor de SANTA Tecla para que proceda a la brevedad posible a judicializar dicho caso (...).

También dirigí un escrito dirigido a la Licda. \*\*\*\*\* y tampoco he recibido ninguna respuesta (...)” [sic].

A ese respecto, este Tribunal hace las consideraciones siguientes:

**I.** Es preciso señalar que la Ley de Ética Gubernamental ha encomendado a este Tribunal la función de prevenir y detectar las prácticas corruptas, así como sancionar los actos y omisiones que se perfilen como infracciones a los deberes y prohibiciones enunciados en los artículos 5, 6 y 7 de dicha Ley, todo ello en armonía con los compromisos internacionales adquiridos con la ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Conforme al principio de tipicidad, toda conducta u omisión constitutiva de infracción administrativa debe estar descrita con claridad en una norma, por ende, la facultad sancionadora de esta institución se restringe únicamente a los hechos contrarios a los deberes y prohibiciones antes mencionados.

Adicionalmente, el artículo 81 letra d) del Reglamento de la LEG establece como causal de improcedencia de la denuncia o aviso que el hecho denunciado sea de competencia exclusiva de otras instituciones de la Administración Pública.

**II.** En el caso particular, el denunciante hace referencia a un retardo en la judicialización de una denuncia que presentó el día dieciocho de octubre de dos mil dieciséis en la Oficina Fiscal de Santa Tecla.

Sobre el particular, el artículo 17 del Código Procesal Penal establece que: “La Fiscalía General de la República está obligada a ejercer la acción penal pública, para la persecución de oficio de los delitos en los casos determinados por este código, salvo las excepciones legales previstas; asimismo, cuando la persecución deba hacerse a instancia previa de los particulares.

Si transcurridos cuatro meses de interpuesta la denuncia, aviso o querrela el fiscal no presenta el requerimiento respectivo o no se pronuncia sobre el archivo de las investigaciones, cuando éste proceda, la víctima podrá requerirle que se pronuncie, respuesta que deberá darse en el plazo de cinco días. en caso de no existir respuesta el interesado podrá acudir al fiscal superior a fin de que, dentro de tercero día, le prevenga al fiscal se pronuncie bajo prevención de aplicar el régimen disciplinario que establece la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. El fiscal deberá resolver en un término de tres días.

En el caso que el fiscal no requiera atendiendo a la complejidad de la investigación o la necesidad de practicar otras diligencias de utilidad, a petición de interesado, el fiscal superior le fijará un plazo que no podrá exceder de tres meses para que presente requerimiento o se pronuncie sobre el archivo.

Ahora bien, si transcurrido cualquiera de los plazos indicados el funcionario competente de la Fiscalía General de la República no se pronuncia sobre los requerimientos de la víctima respecto al ejercicio de la acción penal, se producirá de pleno derecho la conversión de ésta (...).”.

Es decir, la citada disposición establece un mecanismo de control de plazos que opera al seno de la institución fiscal, en virtud del cual, transcurrido el término correspondiente la víctima puede requerirle al fiscal que se pronuncie en un lapso de cinco de días. Si el fiscal no responde, el interesado puede acudir al fiscal superior para que le ordene a aquél que se pronuncie dentro de tres días, so pena de aplicar el régimen disciplinario que establece la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

En todo caso, el Código prevé la conversión de la acción penal de pleno derecho cuando el funcionario competente no se pronuncie dentro de los plazos indicados.

De esta forma, la víctima puede plantear en la misma Fiscalía su inconformidad con el tiempo de respuesta y si a pesar de ello el retardo subsiste, la ley le faculta a ejercer la acción penal por sus propios medios, lo cual de conformidad con el artículo citado procede *de pleno derecho*, es decir, no necesita la autorización de la FGR.

Esto significa que por disposición del legislador los retardos que se producen en sede fiscal deben ser verificados al interior de la misma institución, lo cual excluye la posibilidad que sea este Tribunal quien fiscalice el cumplimiento de los plazos al tratarse de un tema propio de la esfera penal.

Por tanto, y con base en lo dispuesto en los artículos 17 del Código Procesal Penal y 81 letra d) del Reglamento de la Ley de Ética Gubernamental, este Tribunal RESUELVE:

a) *Declárase improcedente* la denuncia presentada por el señor \*\*\*\*\* contra la licenciada Roxana García, servidora pública de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar de la Oficina Fiscal de Santa Tecla.

b) *Tiéndense* por señalados para recibir notificaciones la dirección y el medio técnico que constan a folio 2 del expediente de este procedimiento.

*Notifíquese.*

PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL QUE LO SUSCRIBEN.